





Para la elaboración de este informe se contó con los valiosos aportes de los siguientes expertos y consultorías:

Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe (CAZALAC)
INODÚ CHILE
G&A Consultores
Consultores de Ingeniería de Proyectos y Estudios (CIPRES)
Ingeniería Tomás Cox
Asesorías en Gestión de Empresas GESGROUP Consultores Asociados

JEFE DE PROYECTO Y EDITOR TÉCNICO

Héctor Acuña, Jefe Estudios Infraestructura
Gerencia de Estudios y Políticas Públicas
Cámara Chilena de la Construcción

Equipo de profesionales de la Gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la Cámara Chilena de la Construcción

Catalina Mardones, Coordinadora Estudios Infraestructura
Joaquín Godoy, Coordinador Proyectos Políticas Públicas
María Nieves Hinojosa, Jefa Estudios Territoriales
Iván Torres, Coordinador Estudios Territoriales
Eduardo Acevedo, Coordinador Nacional Estudios
Equipos regionales CChC

DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRÁFICA

Ximena Milosevic
Ana María Baraona

IMPRESIÓN

Andros Impresores

Santiago de Chile
Mayo de 2026

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 2026-2035

MARCO ESTRATÉGICO

Índice	04
Carta del Presidente	06
Resumen	08
Introducción	12



**CAPÍTULO 1
RECURSOS
HÍDRICOS**

Resumen ejecutivo	02
Reseña del sector	07
Situación actual y diagnóstico en Chile	17
Avance de inversiones 2022-2025	32
Brecha y cuantificación de requerimientos 2026-2035	36
Conclusiones y recomendaciones de acción y de política pública	68
Bibliografía	72

**CAPÍTULO 2
ENERGÍA**

Abreviaturas	02
Resumen ejecutivo	03
Reseña del sector	06
Situación actual y diagnóstico en Chile	09
Avance de inversiones 2022-2025	24
Proyecciones del sector y requerimientos 2026-2035	26
Recomendaciones para abordar los desafíos del sector	37
Anexos	41

**CAPÍTULO 3
CONECTIVIDAD
DIGITAL**

Glosario	02
Resumen ejecutivo	04
Alcances del estudio	07
Situación actual y tendencias sector de telecomunicaciones en el mundo y Chile	08
Análisis cualitativo del sector y necesidades estructurales de conectividad	13
Estado deseado conectividad digital al 2035	14
Proyección de demanda y tráfico digital 2026-2035	18
Calidad de servicio y brechas territoriales	25
Requerimientos de inversión 2026-2035	28
Inversión tendencial y brecha de inversión	32
Recomendaciones regulatorias y de política pública	45
Conclusiones	48
Anexos	51

**CAPÍTULO 4
MOVILIDAD
INTERURBANA DE
PERSONAS Y CARGA**

Resumen ejecutivo	02
Competividad y desarrollo	08
Vialidad interurbana	28
Aeropuertos	47
Puertos	62
Ferrocarriles	80
Logística	91
Recomendaciones	103
Anexo	107

**CAPÍTULO 5
CIUDAD**

Resumen ejecutivo	02
Reseña del sector	06
Situación actual y diagnóstico	10
Estimación de requerimientos de inversión 2026-2035	23
Conclusiones y recomendaciones de política pública	34
Anexo 1: Metodologías específicas	39
Anexo 2: Propuesta de cartera de proyectos	53

**CAPÍTULO 6
INFRAESTRUCTURA
DE SALUD**

Resumen ejecutivo	02
Descripción del sector	05
Situación actual y diagnóstico	12
Progreso de la brecha 2022-2031	20
Identificación y requerimiento de la brecha 2026-2035	22
Recomendaciones de acción	33
<i>Establecimientos de larga estada para adultos mayores (ELEAM)</i>	39
Anexos	57

**CAPÍTULO 7
INFRAESTRUCTURA
PENITENCIARIA**

Resumen ejecutivo	02
Descripción del sector	07
Situación actual y diagnóstico	17
Progreso brecha 2022-2031	23
Identificación y requerimientos brecha 2026-2035	28
Recomendaciones de acción	43
Anexos	49

**CAPÍTULO 8
INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR**

Resumen ejecutivo	02
Descripción del sector	07
Situación actual y diagnóstico	14
Progreso brecha 2022-2031	22
Identificación y requerimientos brecha 2026-2035	24
Recomendaciones de acción	39
Anexos	43

Carta del Presidente



Chile enfrenta una etapa marcada por la imperiosa necesidad de que su economía vuelva a crecer con fuerza para satisfacer múltiples demandas y anhelos sociales que siguen pendientes. Esto, en un contexto internacional marcado no solo por crecientes tensiones políticas y económicas, sino por graves conflictos bélicos.

Ante este escenario, ya nadie duda de que la infraestructura –tanto pública como privada– es lo que habilita el crecimiento, el empleo y, en definitiva, un desarrollo económico y social sostenible, que mejore la calidad de vida para las personas y genere un horizonte de nuevas oportunidades.

De ahí que durante sus 75 años de vida la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) ha contribuido a orientar las políticas públicas y la inversión en infraestructura a partir de una mirada de largo plazo, profundamente enraizada en las carencias y desafíos de las comunidades a lo largo de todo el territorio.

El presente informe (Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2026-2035) es –precisamente– un nuevo aporte en este sentido, al ofrecer una hoja de ruta concreta, detallada y con sólidos fundamentos para orientar las decisiones de inversión durante la próxima década.

Esto adquiere especial relevancia dadas las significativas restricciones fiscales que enfrenta nuestro país, lo que exige priorizar aquellos proyectos de alto impacto social y económico y fortalecer los mecanismos de colaboración público-privada que han sido un pilar del desarrollo de la infraestructura en nuestro país. La experiencia muestra que, cuando existe una adecuada articulación entre el Estado y el sector privado, se avanza más eficientemente en cerrar brechas de infraestructura y habilitar el desarrollo territorial.

Asimismo, Chile cuenta hoy con una importante base de planificación acumulada. Diversas estrategias de infraestructura y planes sectoriales han sido elaborados en los últimos años.

El IDS se construye a partir de estos insumos, proponiendo pasos concretos para llevarlos a la práctica, evitando el

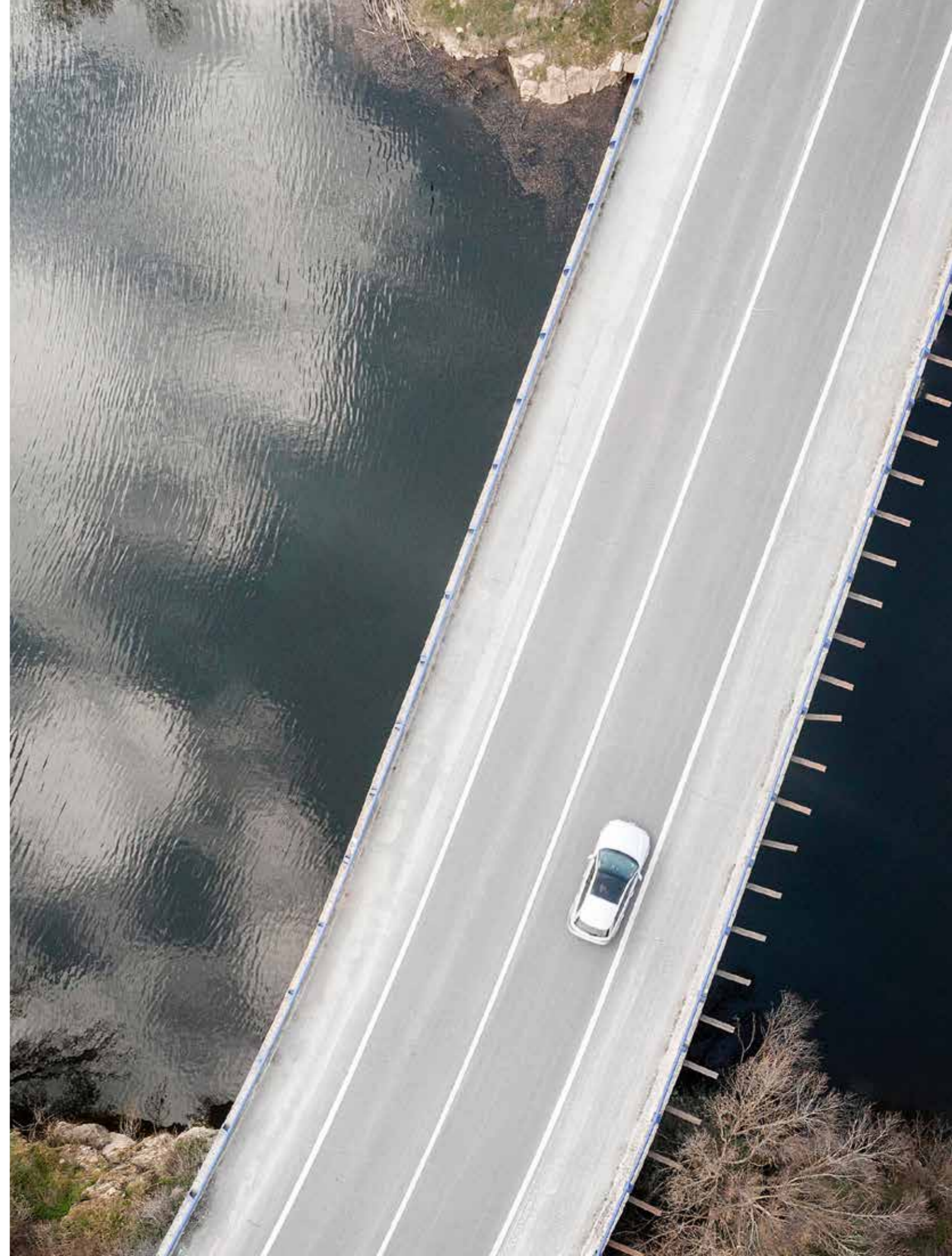
innecesario proceso de que cada nuevo gobierno parta de cero. Las actuales autoridades pueden encontrar en este informe un apoyo clave para no cometer el mismo error y avanzar con coherencia y rapidez.

La industria de la construcción, además, ha enfrentado en los últimos años un complejo escenario, marcado por la caída de la inversión, el encarecimiento de los costos y un deterioro en las condiciones de financiamiento. Reactivar con fuerza la inversión en infraestructura es, por lo tanto, una condición indispensable para impulsar la actividad, el empleo y el desarrollo del país.

Para avanzar en esta dirección será clave abordar algunos desafíos estructurales que hoy dificultan la ejecución de los proyectos. Entre ellos, la necesidad de modernizar y hacer más eficientes los procesos de tramitación y otorgamiento de permisos, resguardando los estándares ambientales y sociales, pero evitando demoras que terminan postergando, encareciendo –y a veces inhibiendo– inversiones estratégicas para el país.

Por medio de esta nueva versión del IDS, nuestro gremio pone a disposición del país y de las autoridades una propuesta que busca contribuir a una agenda de inversión sostenida, resiliente y territorialmente equilibrada. Estamos convencidos de que la infraestructura debe seguir siendo uno de los motores fundamentales del desarrollo de Chile y una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de todas las personas.

Alfredo Echavarría Figueroa
Presidente
Cámara Chilena de la Construcción



Resumen

El informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible 2026-2035 es el resultado de un esfuerzo gremial permanente que apunta a contribuir en la discusión de políticas públicas en materia de infraestructura. De esta forma, en la presente versión, se presenta un análisis detallado, sistemático y trazable de los requerimientos de inversión para el próximo decenio en ocho sectores clave para un desarrollo sostenible, agrupados en tres ejes estratégicos: infraestructura basal (recursos hídricos, energía y conectividad digital), infraestructura para la movilidad interurbana de personas y carga (vialidad interurbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y logística), e infraestructura de uso social (infraestructura de salud y ELEM, infraestructura penitenciaria e infraestructura escolar).

El desafío de gestionar los **recursos hídricos**, en el período que se analiza en esta edición del informe IDS, está marcado por la sequía sin precedentes tanto en duración como en intensidad, asociada al proceso de cambio climático que está sufriendo el planeta. En efecto, Chile ha visto disminuir las precipitaciones en un rango de 60 a 85% respecto de lo que se denomina un año normal, con efectos muy significativos en las diversas cuencas hidrológicas.

En este contexto, los requerimientos de inversión aumentaron de USD 12.342 USD MM en la versión 2022-2031 a **29.924 USD MM** para 2026-2035, explicado en gran parte por una robusta cartera de iniciativas privadas de proyectos de desalación, además de inversiones relacionadas a la provisión de agua potable en zonas urbanas y rurales, y la gestión de uso del recurso, con inversiones específicamente relacionadas con este fin.

En relación a **energía**, en los últimos años, se ha observado un importante desarrollo en el

sector eléctrico, principalmente a través de numerosas iniciativas de inversión a nivel de generación, transmisión y distribución.

No obstante, los requerimientos de inversión aumentaron de 11.525 USD MM en la versión 2022-2031 a **39.951 USD MM** para 2026-2035, principalmente por el fuerte ingreso de proyectos ERNC y de almacenamiento (BESS), y el aumento de la demanda a nivel de transmisión y distribución en los próximos años. Lo anterior, para asegurar la prestación y continuidad de suministro, constituyéndose en un factor habilitante del proceso de descarbonización de cara al 2050, en beneficio de un sistema eléctrico seguro y resiliente frente a los potenciales efectos del cambio climático.

Con respecto a la infraestructura para la **conectividad digital**, si bien el número de conexiones fijas y móviles crece de manera moderada, consistente con un mercado que ha alcanzado niveles elevados de penetración, el consumo de datos por usuario continúa aumentando de forma sostenida y estructural. En consecuencia, el tráfico digital se consolida como el principal determinante de los requerimientos de inversión futura.

Si bien los requerimientos de inversión disminuyeron de 27.809 USD MM en la versión 2022-2031 a **24.643 USD MM** para 2025-2036, éstos se orientan a abordar el aumento proyectado de tráfico, a alcanzar la universalidad en el acceso al servicio, a cerrar las brechas territoriales y al fortalecimiento estructural de las redes, asegurando una conectividad de calidad, resiliente y continua para todos los ciudadanos.

En materia de **movilidad interurbana de personas y carga**, se identifican los principales desafíos y requerimientos del sistema de transporte. En particular, se evalúan las condiciones

actuales y proyectadas de la vialidad interurbana, la red ferroviaria y la infraestructura aeroportuaria, considerando variables como cobertura territorial, capacidad, niveles de servicio, tiempos de viaje, seguridad vial y externalidades ambientales. Este enfoque permite identificar brechas en accesibilidad, calidad de servicio y equidad territorial, en un contexto de creciente demanda y restricciones estructurales de la red.

Por su parte, el sistema logístico de carga se analiza en función de su desempeño en términos de eficiencia, costos, confiabilidad y capacidad de soporte al comercio exterior y a las cadenas productivas. Se identifican restricciones críticas asociadas a la conectividad intermodal, la capacidad de la infraestructura existente, la alta concentración modal en el transporte carretero y la necesidad de avanzar hacia sistemas más integrados, resilientes y sostenibles.

De esta forma, los requerimientos de inversión aumentaron de 40.616 USD MM en la versión 2022-2031 a **55.451 USD MM** para 2025-2036.

El desarrollo de ciudades más accesibles, integradas y sostenibles exige fortalecer la infraestructura urbana que soporta la movilidad cotidiana y la calidad del espacio público. En este contexto, esta versión del informe incorpora por primera vez un capítulo dedicado a **Ciudad**, que estima los requerimientos de inversión en infraestructura urbana para el período 2026-2035, considerando vialidad urbana, sistemas de transporte público y ciclovías, así como espacios públicos de movilidad –como aceras– y de permanencia –como plazas y parques–. En conjunto, los requerimientos de inversión en estos ámbitos ascienden a **58.901 USD MM** para los próximos diez años.

Los determinantes asociados a las necesidades de inversión en **infraestructura de salud** están impulsados por dos fenómenos. Por

un lado, el envejecimiento de la población y la persistencia de su perfil epidemiológico. Por otro lado, se observa que los beneficiarios de Isapre han disminuido en más de un 20% en cinco años, mientras que la población cubierta por el sector público a través del FONASA asciende a casi 17 millones de personas. Este desplazamiento hacia el aseguramiento público estaría incrementando la presión sobre la red estatal y obligaría a acelerar los procesos de expansión y modernización de la infraestructura sanitaria.

Los requerimientos de inversión aumentaron de 11.986 USD MM en la versión 2022-2031 a **16.135 USD MM** para 2026-2035. Dada la realidad económica de país, hace difícil simular escenarios realistas de expansión significativa del gasto público en salud. En este sentido, avanzar con los proyectos de inversión en la modalidad de Alianza Público-Privada, sería técnicamente una decisión apropiada.

El envejecimiento de la población trae consigo crecientes requerimientos de infraestructura destinada al cuidado de las personas mayores, particularmente de aquellas con dependencia severa que no cuentan con redes de apoyo o cuidadores. En este contexto, esta versión del informe estima por primera vez los requerimientos de inversión en **establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEM)**, los que para el período 2026-2035 ascienden a **1.970 USD MM**.

Por su parte, en materia de **infraestructura penitenciaria**, Chile cuenta con 83 establecimientos penitenciarios cerrados, de los cuales 10 son establecimientos concesionados y 73 institucionales. En término de plazas, el subsector concesionado cuenta con 19.374 (46%) y el subsector institucional dispone de 23.123 (54%). En total, el sistema penitenciario cuenta con un

TABLA 01

Resumen inversiones IDS 2022-2031 e IDS 2026-2035

SECTOR	IDS (US\$ MM) 2022-2031	SECTOR	IDS (US\$ MM) 2026-2035
Recursos hídricos	12.342	Recursos hídricos	29.924
Energía	11.525	Energía	39.951
Telecomunicaciones	27.809	Conectividad digital	24.643
Vialidad interurbana	28.013	Movilidad interurbana de personas y carga	55.451
Aeropuertos	2.256		
Puertos	4.224		
Ferrocarriles	4.520		
Logística	1.603		
Vialidad urbana	54.864		
<i>Mantenimiento de áreas verdes y espacios públicos</i>	<i>1.054</i>		
		Ciudad	58.901
Salud	11.986	Infraestructura de salud	16.135
		<i>ELEAM</i>	<i>1.970</i>
Cárceles	1.476	Infraestructura penitenciaria	6.568
<i>Infraestructura judicial</i>	<i>739</i>		
Educación	15.105	Infraestructura escolar	19.046
Total	177.516	Total	252.589

Fuente: Elaboración propia.

total de 42.497 plazas. En los últimos cuatro años, la ocupación promedio ha aumentado significativamente, desde el 94% a 146%.

Los requerimientos de inversión aumentaron de 1.476 USD MM en la versión 2022-2031 a **6.568 USD MM** para 2026-2035, lo que se explica principalmente por el significativo aumento de las tasas de ocupación de los recintos penitenciarios.

En materia de **infraestructura escolar**, la estimación de los requerimientos de infraestructura educacional buscan abordar el deterioro acumulado de los establecimientos, producto de una inversión en mantenimiento, reposición y normalización de establecimientos que ha sido insuficiente, y que hoy se expresa en salas de clases en mal estado, carencia de espacios pedagógicos adecuados, deficiencias en servicios higiénicos, problemas de calefacción y ventilación, y brechas relevantes en conectividad digital.

Los requerimientos de inversión aumenta-

ron de 15.105 USD MM en la versión 2022-2031 a **19.046 USD MM** para 2026-2035, explicados principalmente las puestas al día y normalizaciones requeridas.

A nivel agregado, se resumen las necesidades de inversión cuantificadas para el decenio 2026-2035 en la Tabla 01.

Si bien se observa un aumento significativo de 42% en los requerimientos de inversión entre ambos informes y el flujo anualizado a primera vista se podría ver inalcanzable, es importante destacar que este incremento no responde exclusivamente a una mayor necesidad de infraestructura vía financiamiento público. De hecho, un 61% del aumento se explica por el mayor dinamismo del sector privado, particularmente en los sectores de recursos hídricos y energía, reflejado en la expansión de sus respectivas carteras de iniciativas. Este comportamiento evidencia el creciente rol del sector privado en la provisión de infraestructura estratégica y la relevancia de

TABLA 02

IDS 2026-2035: Resumen por fuente de financiamiento

SECTOR	IDS (USD MM) 2026-2035	FINANCIAMIENTO POTENCIAL					
		PÚBLICA		MIXTO - APP		PRIVADO Y EMPRESAS AUTÓNOMAS DEL ESTADO	
		(USD MM)	PARTICIPACIÓN (%)	(USD MM)	PARTICIPACIÓN (%)	(USD MM)	PARTICIPACIÓN (%)
Recursos hídricos	29.924	5.755	19%	2.690	9%	21.479	72%
Energía	39.951	-	-	-	-	39.951	100%
Conectividad digital	24.643	-	-	-	-	24.643	100%
Movilidad interurbana de personas y carga	55.451	16.487	30%	24.013	43%	14.952	27%
Ciudad	58.901	42.908	73%	9.987	17%	6.006	10%
Infraestructura de salud	16.135	2.268	14%	13.867	86%	-	-
<i>ELEAM</i>	<i>1.970</i>	-	-	<i>1.970</i>	<i>100%</i>		
Infraestructura penitenciaria	6.568	-	-	6.568	100%	-	-
Infraestructura escolar	19.046	19.046	100%	-	-	-	-
Total	252.589	86.464	34%	59.095	23%	107.031	42%

Fuente: Elaboración propia.

generar condiciones habilitantes que permitan materializar dichas inversiones.

Relacionado a esto último, resulta de interés desagregar las necesidades futuras de inversión acorde con sus potenciales fuentes de financiamiento. Al realizar la apertura según potencial fuente de financiamiento u origen de la inversión, se observa que el 42% de esta provendría de recursos de carácter privado o de empresas autónomas del Estado. Lo anterior ilustra la importancia del concepto de Alianzas Público Privadas (APP) en sus distintas formas para efectos de lograr suplir la brecha en el horizonte de tiempo bajo análisis, adicionalmente a aportar a descomprimir las finanzas públicas en el contexto actual de severa estrechez fiscal. De hecho, al considerar financiar vía recursos públicos el esfuerzo a ejecutar vía APP, se generarían déficits anuales que corresponderían a 23% de las inversiones acumuladas hacia el fin del decenio. Para evitar esto, se debería elevar en 1,6% de PIB

la inversión en infraestructura en el período, actualmente cercana al 3% del PIB (Tabla 02).

Es importante mencionar también que, al llevar los requerimientos de inversión estimados para el período 2026-2035 a flujos anuales, se observa que aquellos asociados al sistema de concesiones alcanzarían niveles cercanos a triplicar los montos actualmente ejecutados. Si bien esta magnitud podría interpretarse como difícil de alcanzar en el corto plazo, no debe entenderse como un ejercicio de voluntarismo, sino como la expresión del cambio estructural que el país requiere para cerrar sus brechas de infraestructura y sostener su competitividad en el largo plazo. En este sentido, más que una meta inmediata, estos niveles de inversión representan una trayectoria deseable que exige fortalecer las condiciones habilitantes del sistema de concesiones –institucionales, regulatorias y financieras– permitiendo avanzar progresivamente hacia dichos estándares.

Introducción

LA INFRAESTRUCTURA COMO MOTOR DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE CHILE AL 2035

Los desafíos que enfrenta el país son diversos y presentan distintos grados de urgencia dependiendo de los territorios o los grupos que estos afectan. A pesar de la diversidad de estos desafíos, existe consenso en que las respuestas y soluciones deben ser sostenibles en el tiempo y eficientes en el uso de los recursos utilizados. Es en este contexto donde la infraestructura bien planificada y resiliente surge como una respuesta clave para abordar estos desafíos, dado su carácter habilitador estructural del desarrollo económico y social, y también como solución directa y concreta a necesidades ciudadanas tan cotidianas como contar con centros de salud primaria cercanos y veredas de calidad a la salida de sus hogares.

La infraestructura constituye un activo estratégico de política pública, con efectos transversales en pilares para el crecimiento del país. Su provisión oportuna y de calidad permite atraer inversión, generar empleo, descentralizar e integrar territorios y, especialmente, mejorar el acceso de las personas a servicios, oportunidades y una mejor calidad de vida.

En este sentido, la evidencia comparada muestra una fuerte relación entre la calidad de la infraestructura y el nivel de desarrollo económico. La Figura 1, que muestra el puntaje en el factor de infraestructura del Ranking Mundial de Competitividad del IMD (International Institute for Management Development) 2024; y el

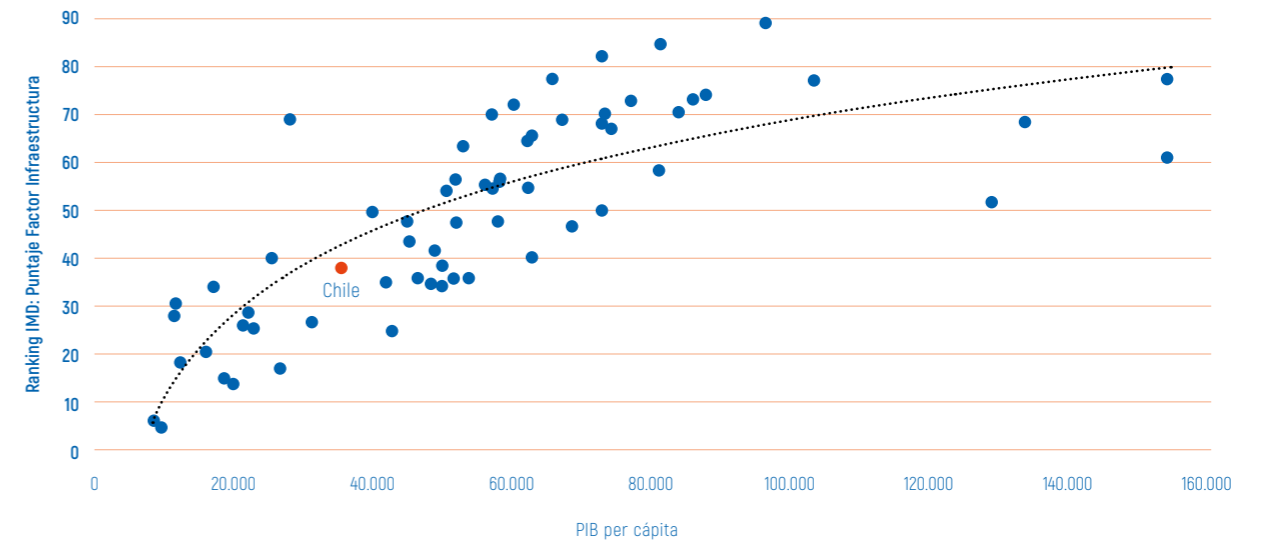
PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra, 2024; refleja una relación positiva: una provisión adecuada y oportuna de infraestructura actúa como un habilitador clave de los saltos en desarrollo, particularmente en las etapas iniciales e intermedias, al expandir la conectividad, reducir costos logísticos y energéticos, y ampliar el acceso a mercados, servicios y capital humano. Mientras que, en economías más avanzadas, su rol se orienta crecientemente a la optimización, resiliencia y sofisticación de redes ya consolidadas, con impactos más incrementales que estructurales sobre la trayectoria de crecimiento (Figura 1).

En los países desarrollados, una infraestructura de alto estándar conecta de manera eficiente los territorios, potencia la integración productiva y fortalece la cohesión social. Por otro lado, en América Latina, la falta de enfoques integrales ha derivado con frecuencia en avances fragmentados, desfasados entre sectores y poco sostenidos en el tiempo, lo que ha limitado su impacto en la competitividad y en el bienestar de las personas¹. Superar este patrón requiere fortalecer la gobernanza de la inversión, alinear la infraestructura con las estrategias de desarrollo productivo y territorial, y asegurar carteras de proyectos con visión de largo plazo y estables en el tiempo.

Chile, como país en desarrollo, tiene la oportunidad de apalancarse en la infraestructura para superar las trampas de ingreso medio, habilitar nuevos polos productivos y reducir desigualdades territoriales y sociales. Lo anterior, sin embargo, requiere de condiciones mínimas

1 "De estructuras a servicios: el camino a una mejor infraestructura en América Latina y el Caribe" (BID, 2020).

FIGURA 1
Relación entre Ranking Mundial de Competitividad del IMD (International Institute for Management Development) - Puntaje en Factor Infraestructura, 2024; y PIB per cápita (US\$ ajustados por PPP), Banco Mundial 2024



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de IMD World Competitiveness Booklet 2024 y Banco Mundial.

en las que se debe avanzar, donde destaca la necesidad de contar con una planificación de largo plazo y asegurar la continuidad de la inversión en infraestructura.

En este contexto, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), desde 2002 y cada cuatro años, elabora el Informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS)², y busca posicionarlo como una herramienta estratégica para orientar decisiones del próximo ciclo de gobierno, identificando brechas, priorizando sectores y promoviendo una inversión pública y privada que no solo impulse el crecimiento, sino que también amplíe el acceso a servicios y mejore la calidad de vida de las personas a lo largo del país.

El informe se enmarca en el consenso global respecto de la necesidad de incrementar la inversión pública y privada en infraestructura para alcanzar las metas de bienestar social y crecimiento sostenible de los países, independiente

de su nivel de desarrollo³. Este análisis también indica que si bien existen variadas oportunidades para invertir en proyectos de infraestructura que tengan impacto en el crecimiento, la realidad de cada país es significativamente diferente y, por tanto, es importante establecer metas estratégicas acordes al perfil de desarrollo que se proyecta hacia el futuro.

Desde el punto de vista teórico, aumentos en la inversión en infraestructura pública tienen estricta relación con el impacto dual que esta genera en la economía: en el corto plazo, potencia la demanda agregada a través del efecto multiplicador fiscal –de manera similar a otros tipos de gasto público– y, en horizontes temporales más extensos, fomenta la inversión privada dada la complementariedad existente entre esta y los servicios asociados a la provisión de infraestructura, además de aumentos en materia de productividad.

2 Anteriormente, denominado como Balance de Infraestructura, y luego, hasta 2018, como Informe Infraestructura Crítica para el Desarrollo (ICD).
3 Fostering Investment in Infrastructure (OCDE, 2015), Construction 2025 (HM Government, 2013), Transformation through Infrastructure (World Bank, 2011).

Debido a ello, este informe fue desarrollado bajo dos premisas fundamentales:

1. La importancia de identificar las necesidades de infraestructura que permitan alcanzar un mayor crecimiento económico a través de una mayor productividad, en tres niveles estratégicos: basal, uso productivo y social. Los temas considerados en cada apartado reconocen aquellas áreas deficitarias o claves para destrabar los frenos que limitan la eficiencia en la actividad productiva.
2. Contar con una mirada de futuro que permita identificar tanto la trayectoria como el volumen de las inversiones requeridas en el próximo decenio, de forma tal que se logre incrementar el crecimiento potencial de la economía. Para ello, se elabora un escenario futuro deseado a través de indicadores y estándares objetivos y trazables en el tiempo, con el fin de establecer una visión de desarrollo que permita guiar las inversiones sectoriales a través de planes estratégicos que sean viables durante la próxima década.

LOS EJES ESTRATÉGICOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Con el objetivo de reconocer la importancia de contar con una visión estratégica sobre las necesidades del país en términos de infraestructura, en esta versión del Informe nuevamente se consideró una estructura que reconoce las necesidades de inversión en los tres niveles mencionados con anterioridad, bajo el siguiente orden:

3. Infraestructura que sostiene al país (basal): Recursos hídricos, energía y conectividad digital.
4. Infraestructura que conecta al país (apoyo logístico): Movilidad interurbana de personas y carga (vialidad interurbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y logística).
5. Infraestructura que integra al país (uso social): Infraestructura vial y de espacios públicos para las ciudades, infraestructura educativa, hospitalaria y para la larga estadía de adultos mayores, y penitenciaria.

Este esquema busca reconocer que en el Chile actual existen necesidades múltiples y transversales a la sociedad, entendiendo que no solo son aspectos actualmente deficitarios, sino que también son aquellos que presentan la mayor posibilidad de generar ganancias de eficiencia en la actividad económica. A su vez, las ganancias en crecimiento del producto asociadas a este tipo de inversiones son a corto y largo plazo, siempre y cuando existan necesidades claramente definidas y procesos de gestión de inversión pública eficientes⁴.

ESCENARIO FUTURO Y ALGUNAS TENDENCIAS AL 2035

Respecto al desarrollo de mediano plazo para Chile y el mundo, se reconocen cinco tendencias que moldearán las sociedades del futuro⁵ y que tienen una alta probabilidad de afectar las decisiones de planificación estratégica para efectos de la provisión de servicios de infraestructura de cara al próximo decenio.

1. Envejecimiento de la población

De acuerdo con el Censo 2024 de Chile, la edad mediana estaría alcanzando los 38 años y la población de 65 años o más supera el 14%, por lo que el país se encamina a superar la edad mediana de 40 años antes de 2030, profundizando su transición hacia una sociedad envejecida.

El envejecimiento de la población plantea desafíos crecientes para la infraestructura, al redefinir las prioridades de inversión hacia sistemas de salud y cuidado de mayor cobertura, capacidad y especialización. Una de sus principales implicancias es el aumento sostenido de los requerimientos de infraestructura hospitalaria, de atención primaria y de servicios sociosanitarios y de cuidado de largo plazo, tanto en términos de camas, equipamiento y redes territoriales de atención. En paralelo, exige adaptar el entorno urbano para la tercera y cuarta edad, fortaleciendo la accesibilidad universal mediante transporte público inclusivo, espacios públicos seguros, vivienda adecuada y una provisión de servicios de

⁴ Is it time for an infrastructure push? The macroeconomic effects of public investment, FMI 2014.

⁵ Basado en Visual capitalist. Disponible: <https://www.visualcapitalist.com/5-undeniable-long-term-trends-shaping-societys-future/>

FIGURA 2
Evolución edad mediana

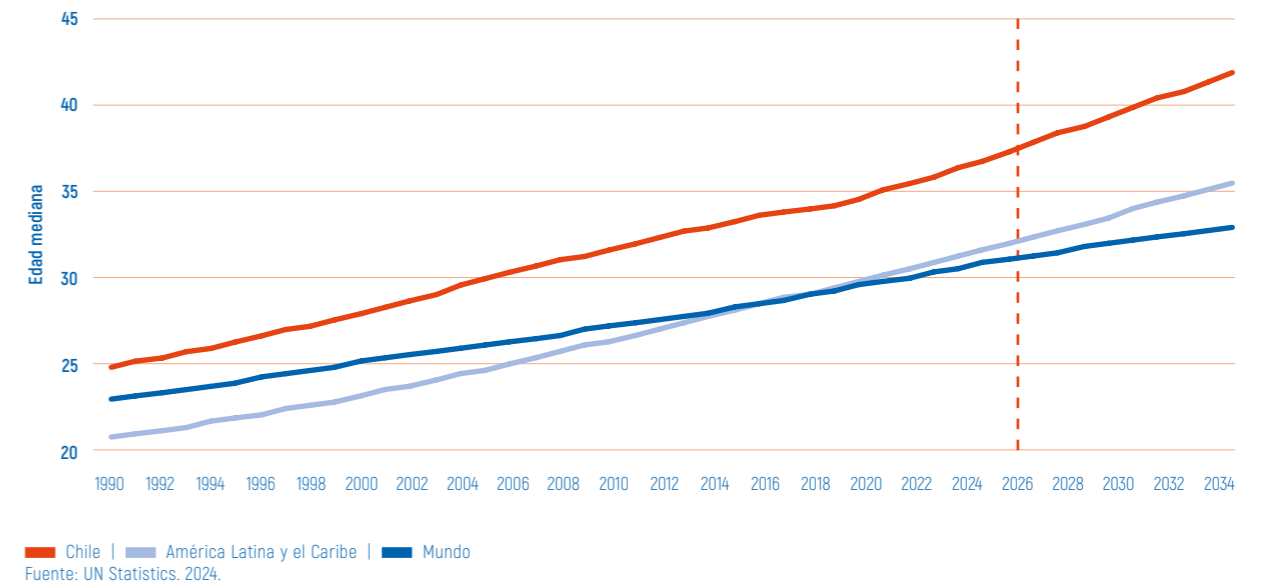
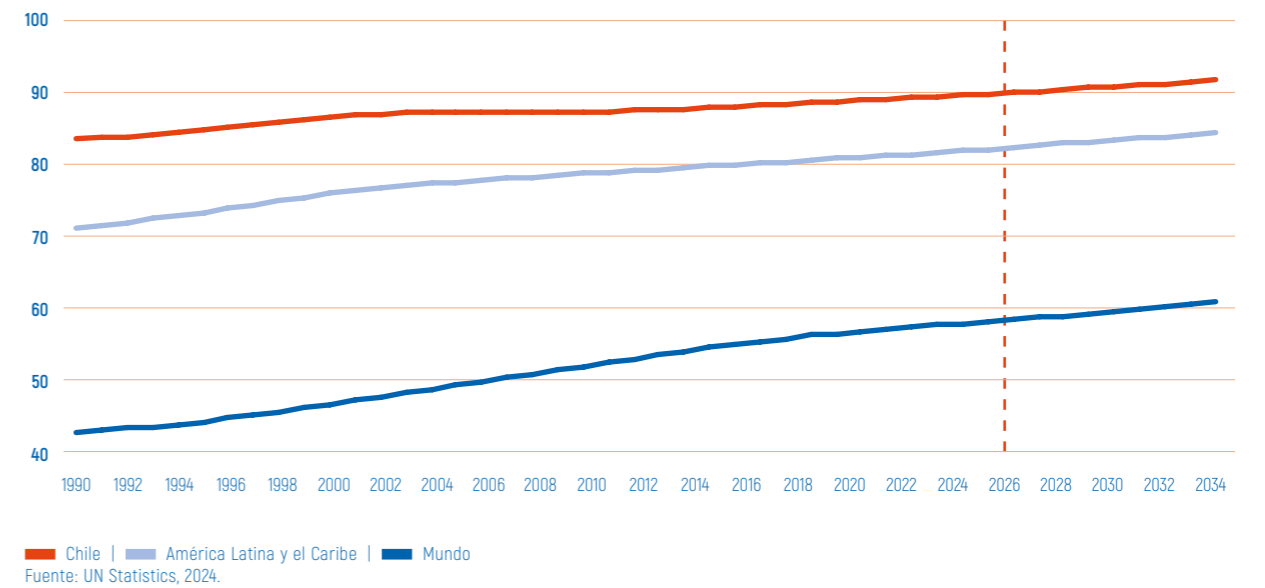


FIGURA 3
Evolución población urbana sobre el total (%)



proximidad que permita sostener la autonomía, la calidad de vida y la integración social de una población cada vez más longeva (Figura 2).

2. Consolidación de una alta población urbana

De acuerdo con el Censo 2024 de Chile, más del 87% de la población reside en ciudades mientras la ruralidad cae bajo el 13%, consolidando un patrón de crecimiento futuro predominantemente urbano. Este escenario impone desafíos estructurales para la planificación, financiamiento y gestión de la infraestructura, ya que la elevada concentración de personas y actividades intensifica de manera persistente la presión sobre sistemas críticos como transporte, agua potable y saneamiento, energía, vivienda y conectividad digital, aumentando los riesgos de congestión, deterioro de servicios y brechas territoriales. A ello se suma la necesidad de pasar desde lógicas de expansión a enfoques integrados de renovación, densificación y uso de suelo e infraestructura, incorporar criterios de resiliencia frente al cambio climático y eventos extremos, y fortalecer los mecanismos de coordinación público-pri-

vada para movilizar inversión oportuna y sostenida, evitando que los rezagos en la provisión de infraestructura se traduzcan en pérdidas de productividad, calidad de vida y cohesión social (Figura 3).

3. Flujos migratorios

De acuerdo con el Censo 2024 de Chile, la población nacida en el extranjero bordea el 8% y, en un contexto de baja natalidad, se proyecta como el principal motor de crecimiento demográfico y de reposición de población en edad de trabajar hacia 2030. Un flujo significativo de migrantes plantea desafíos relevantes para la infraestructura, particularmente en los sistemas de uso social que sostienen la cohesión y la integración territorial. La llegada de nuevas poblaciones incrementa la demanda por infraestructura educativa, servicios de salud y redes de atención social, requiriendo una expansión oportuna de capacidad, equipamiento y dotación en establecimientos educacionales, centros de atención primaria y hospitales. En paralelo, la planificación de la infraestructura del sistema de justicia y reinserción –incluyendo recintos

FIGURA 4
Migración en Chile

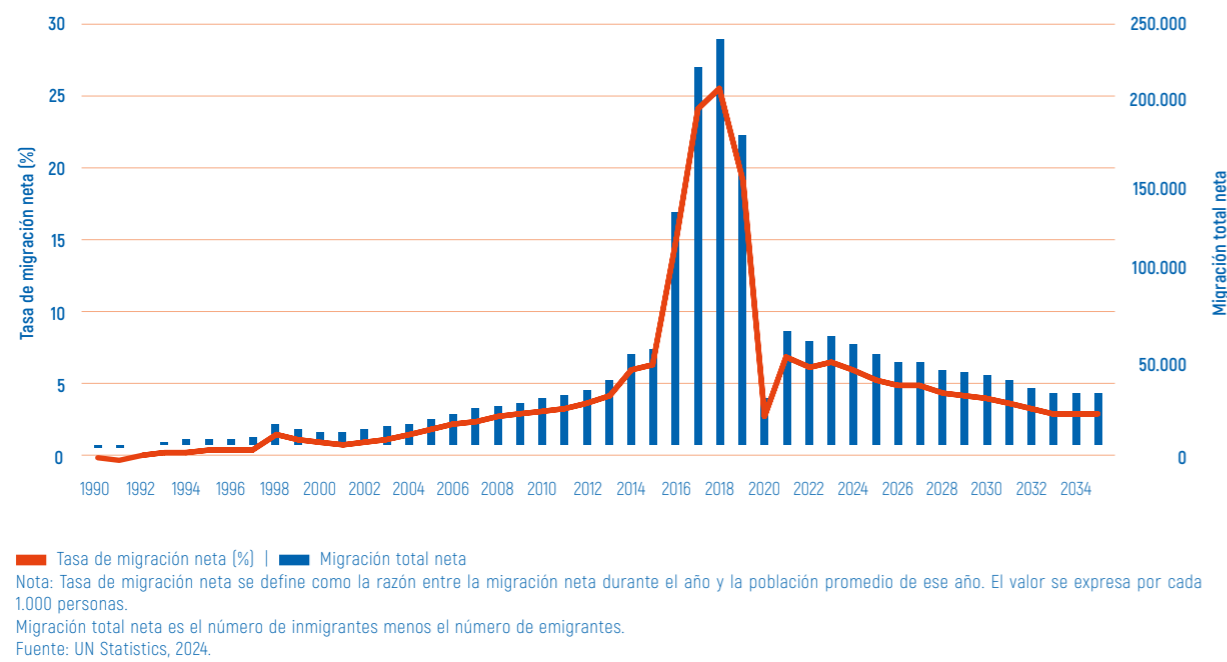
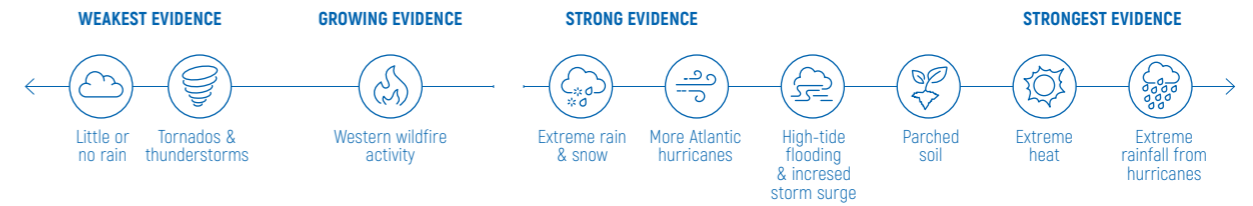


FIGURA 5
Conexión entre el cambio climático y eventos climáticos extremos



Fuente: Union of Concerned Scientists (UCS, 2012). The Science Connecting Climate Change to Extreme Weather Events.

penitenciarios– debe responder al crecimiento demográfico general y a la atención del subgrupo de personas que, independientemente de su origen, incurre en conductas delictivas, desde un enfoque de gestión pública y derechos, asegurando que no se generen cuellos de botella institucionales ni brechas en el acceso a servicios, y que se mantengan estándares adecuados de convivencia, seguridad y bienestar para toda la población (Figura 4).

4. Vulnerabilidad al cambio climático

No hay dudas de que el mundo está siendo crecientemente afectado por el cambio climático, y Chile no es la excepción. De hecho, el país se encuentra entre los territorios altamente vulnerables debido a su extensa franja de borde costero de baja altura, amplias zonas áridas y semiáridas, ecosistemas forestales y de montaña, alta exposición a sequías, aluviones, incendios forestales y eventos hidrometeorológicos extremos, así como una fuerte dependencia de sus principales actividades socioeconómicas de variables atmosféricas y ambientales, especialmente de la disponibilidad hídrica. Las proyecciones climáticas y de riesgo hacia 2035 anticipan un escenario de mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos, lo que incrementa la probabilidad de disrupciones en servicios esenciales y en redes territoriales estratégicas. A nivel global, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) estima que entre 2000 y 2019 los desastres asociados a eventos climáticos generaron pérdidas económicas por cerca de USD 3 billones (trillions en inglés), con una tendencia al alza que refuerza la urgencia de actuar en esta década. En este contexto, la

ausencia de infraestructura resiliente –particularmente en sistemas de agua, transporte, energía y conectividad– amplifica los impactos económicos y sociales de cada evento extremo, traduciéndose en interrupciones prolongadas de servicios, aislamiento territorial y pérdida de productividad.

Bajo este escenario, la planificación estratégica de la infraestructura se convierte en un factor habilitante clave para la trayectoria de desarrollo de Chile en el horizonte 2026–2035. En primer lugar, porque avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible y eficiente en el uso de recursos exige que las decisiones de inversión de esta década incorporen criterios de resiliencia, adaptación climática y gestión de riesgos desde su fase de diseño y estructuración. En segundo lugar, porque la evidencia internacional muestra que cada dólar invertido en infraestructura resiliente puede generar entre 4 y 7 dólares en beneficios económicos futuros, al reducir costos de reconstrucción, pérdidas productivas y disrupciones en servicios críticos (Banco Mundial y Global Commission on Adaptation). En esa lógica, el pre-diseño de inversiones en redes hídricas, vías redundantes, infraestructura de respaldo energético y sistemas urbanos adaptativos durante los próximos diez años no solo extiende la vida útil de los activos, sino que fortalece la continuidad territorial, la competitividad y la capacidad del país para enfrentar un entorno climático crecientemente incierto hacia 2035.

5. Deterioro del contexto geopolítico

Es posible que el escenario internacional de los próximos años este marcado por un nuevo contexto geopolítico caracterizado por conflictos

armados, escaladas arancelarias y disrupciones en las cadenas logísticas y en los mercados energéticos. Este entorno podría configurar un nivel estructuralmente más alto de incertidumbre, con efectos persistentes sobre la inflación y un retraso en la normalización de las tasas de interés, impactando las decisiones de inversión a nivel global y local. En este contexto, Chile puede fortalecer su resiliencia económica y territorial mediante una inversión estratégica y oportuna en infraestructura, que permita asegurar la continuidad operativa, diversificar riesgos, mejorar la conectividad y consolidar la competitividad del país frente a un entorno internacional cada vez más volátil.

ESCENARIO FUTURO - INDICADORES Y SELECCIÓN DE PAÍSES BENCHMARK

Visión 2035: Con qué economías nos podemos comparar

Una vez definida la estructura y la visión a futuro a considerar como lineamientos del presente documento, se consideró clave definir indicadores trazables y una meta de desarrollo del país hacia el próximo decenio. La Visión 2035 requiere entonces elementos de comparación para hacerla tangible a través de indicadores y condiciones que configuran el estado esperado

futuro. Para esto, se proyecta el PIB per cápita de nuestro país hacia 2035 y se revisa un grupo de países que actualmente tienen niveles de PIB per cápita comparables con dichas proyecciones: Grecia, Portugal, España y Nueva Zelanda. Si bien los últimos tres exhiben niveles superiores en cuantos a PIB per cápita, el desafío es alcanzar estos niveles a través de una mejor planificación, inversión y provisión de infraestructura, que permita una mayor productividad, competitividad, crecimiento económico y desarrollo sostenible en el mediano plazo (Tabla 1).

Visión 2035: Implicancias en términos de competitividad e infraestructura

Respecto a la capacidad de atraer inversiones y mejorar la competitividad país, el Ranking Mundial de Competitividad, elaborado por el IMD (International Institute for Management Development), resulta ser una herramienta útil de comparación. Este ranking se compone de 4 pilares que reflejan diferentes aspectos determinantes de la competitividad para 69 economías del mundo: desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia en los negocios e infraestructura.

En específico, el pilar de infraestructura considera en su construcción el desempeño y provisión de infraestructura basal, de conectividad y de uso social, cubriendo así, las áreas

de interés de este informe. El siguiente gráfico muestra la posición relativa de Chile respecto a los países seleccionados para la comparación, en términos de su puntuación en el ranking de competitividad en el periodo 2022-2025 (Figura 6 y Figura 7).

La comparación de Chile con Portugal, España, Grecia y Nueva Zelanda muestra que, en el ranking general, Chile se posiciona por sobre Grecia y en niveles relativamente cercanos a España y Portugal. Sin embargo, al desagregar los resultados por pilares, se observa una brecha

TABLA 1
Proyección PIB per cápita (USD, PPP)

AÑO	CHILE			GRECIA	PORTUGAL	ESPAÑA	N. ZELANDA
	Escenario Conservador (Crec. anual de 1,2%)	Base Tendencial (Crec. anual de 1,8%)	Escenario Optimista (Crec. anual de 2,5%)				
2024	34.637	34.637	34.637	44.005	50.650	56.878	55.625
2025e	35.053	35.261	35.503	44.665	51.409	57.731	56.459
2026e	35.474	35.895	36.391	45.335	52.180	58.597	57.306
2027e	35.899	36.541	37.301				
2028e	36.330	37.198	38.234				
2029e	36.766	37.868	39.190				
2030e	37.207	38.549	40.170				
2031e	37.654	39.243	41.174				
2032e	38.106	39.950	42.203				
2033e	38.563	40.669	43.258				
2034e	39.026	41.401	44.339				
2035e	39.600	42.146	45.447				

Fuente: Banco Mundial, 2024.

FIGURA 6
Puntuación Ranking Mundial de Competitividad IMD

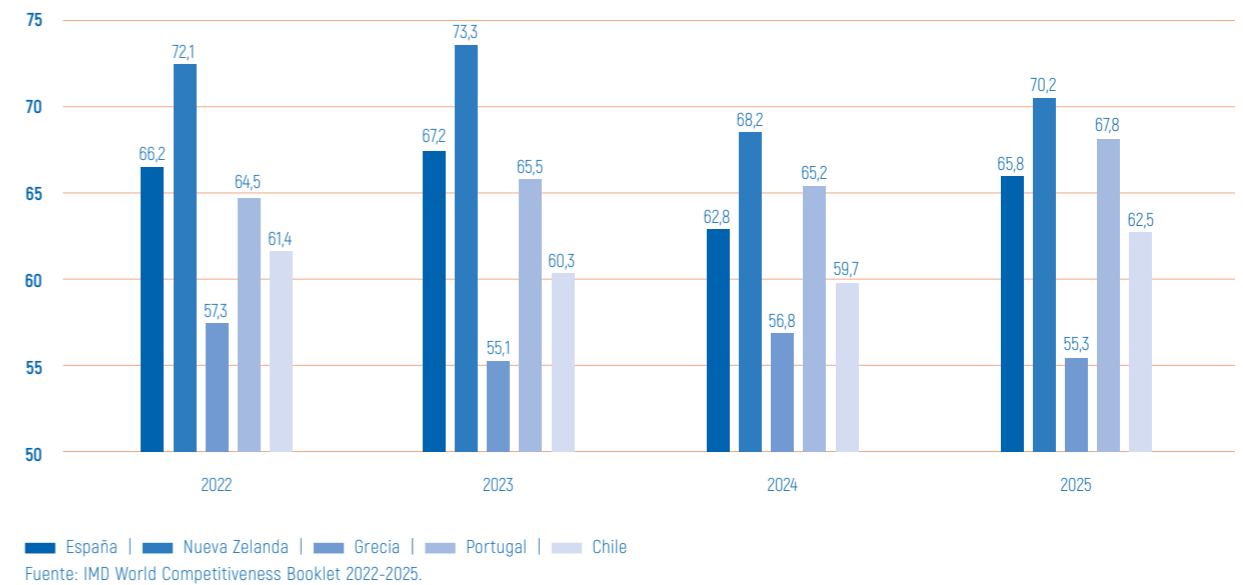


FIGURA 7
Puntuación Ranking Mundial de Competitividad IMD - Pilar Infraestructura

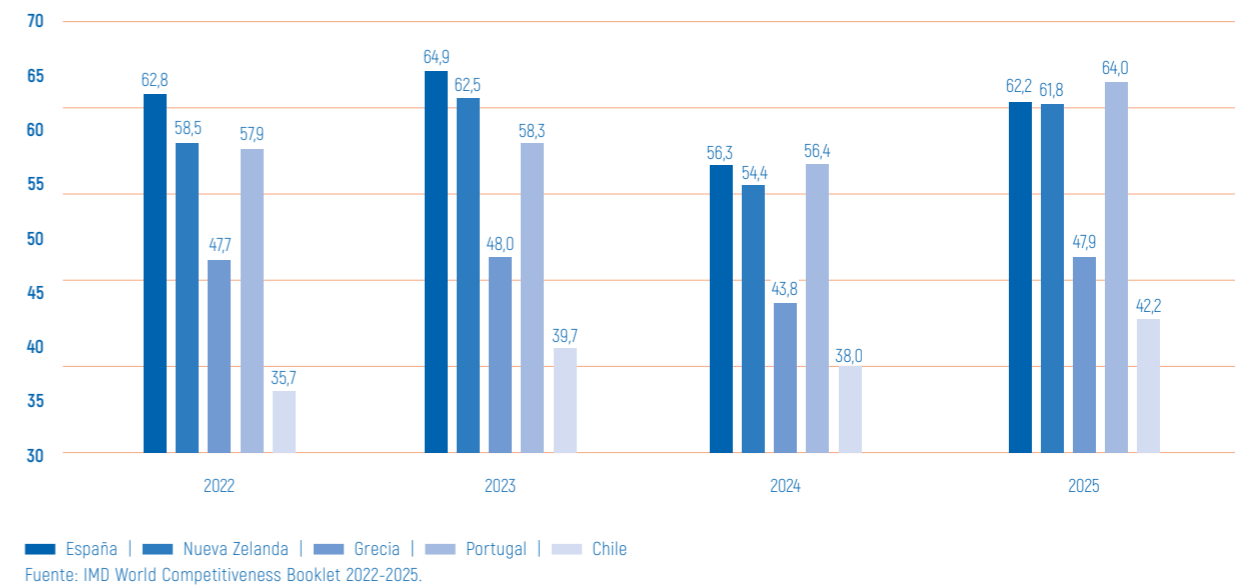


TABLA 2
Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2018-2023

PAÍS	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nueva Zelanda	0,938	0,938	0,94	0,939	0,933	0,938
España	0,905	0,91	0,901	0,912	0,911	0,918
Grecia	0,893	0,896	0,896	0,897	0,897	0,908
Portugal	0,866	0,872	0,87	0,876	0,883	0,89
Chile	0,866	0,867	0,856	0,865	0,869	0,878

Fuente: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 2024.

significativa en el pilar de infraestructura, donde Chile presenta un rezago evidente respecto de las otras cuatro economías analizadas. Este desempeño sugiere que, pese a una competitividad macro y de entorno de negocios comparable, el país enfrenta limitaciones estructurales en la provisión, modernización y expansión de su infraestructura, lo que es consistente con un escenario de estancamiento relativo de la inversión y con barreras persistentes en los procesos de desarrollo de proyectos –como la complejidad regulatoria y de permisos–. En ese contexto, la infraestructura emerge como un desafío estratégico prioritario para sostener la productividad, la atracción de inversión y la convergencia hacia niveles de desarrollo comparables con economías OCDE de referencia.

Un segundo grupo de indicadores estratégicos para establecer un benchmark al año 2035 se refiere a condiciones de contexto social vinculado al desarrollo, particularmente de los hogares en su capacidad para ser más productivos y alcanzar un mayor bienestar agregado. Para este fin se seleccionó el Índice de Desarrollo Humano (IDH), elaborado por Naciones Unidas. El IDH gira en torno a tres dimensiones: longevidad y calidad de vida (salud), nivel de conocimientos o capital humano (educación) y estándares de vida en cuanto a poder adquisitivo (ingresos). La media geométrica de las tres dimensiones evaluadas permite construir el IDH (Tabla 2).

Al revisar el nivel del IDH para el año 2023 de Chile y compararlo con los países seleccionados, fue posible determinar la magnitud de la brecha que el país debe aumentar para llegar al nivel consistente según su PIB per cápita proyectado.

Un seguimiento del índice entre diferentes países y por más de una década muestra que los avances más importantes ocurren en los niveles bajos del IDH, en que los países enfatizan la necesidad de contar con las condiciones básicas de salud, educación y vivienda. Una vez logrado ese nivel (aproximadamente en un IDH=0,5), se dan las condiciones que les permiten avanzar en dimensiones como desarrollo económico y productividad. Asimismo, en el caso de los países con mayor nivel de ingreso, el avance del índice es menor aun para incrementos del PIB significativos. Hacia 2023, Chile mostraba un índice de 0,878. Si mantuviese el mismo ritmo con que aumentó en el periodo 2018-2023, alcanzaría el nivel actual de Nueva Zelanda en el año 2047, el de España en el año 2040, el de Grecia en el año 2035 y el de Portugal en el año 2028.

Se deduce entonces, que lograr un incremento significativo en el PIB per cápita no implica que de manera automática se logren los niveles de bienestar de países más desarrollados. Por esto, se requiere definir estrategias claras y prioridades que muevan al país en las dos direcciones: desarrollo económico y desarrollo social, de forma balanceada. Este ejercicio de convergencia temporal permite traducir brechas de desarrollo humano en horizontes de política pública. Bajo el ritmo reciente de avance de Chile, la convergencia con economías OCDE de referencia no se mide en años de gobierno, sino en décadas de inversión sostenida en capital humano, infraestructura y productividad, reforzando la necesidad de continuidad y profundidad en las estrategias de desarrollo.

DESAFÍOS TRANSVERSALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE UN CHILE POSIBLE

La magnitud y diversidad de los requerimientos de inversión en infraestructura que enfrenta Chile durante la próxima década exigen abordar un conjunto de desafíos estructurales que trascienden a los sectores productivos específicos. La experiencia internacional muestra que los países que logran traducir carteras de proyectos en crecimiento económico, cohesión territorial y resiliencia social son aquellos que alinean planificación de largo plazo, marcos regulatorios predecibles, capacidades institucionales sólidas y mecanismos eficaces de articulación público-privada⁶. En este contexto, los siguientes desafíos constituyen condiciones habilitantes para asegurar continuidad de la inversión, dar certidumbre para los inversionistas y legitimidad social para los proyectos.

1. Infraestructura como política de Estado y planificación de largo plazo

La infraestructura debe consolidarse como un pilar permanente de la estrategia de desarrollo nacional, con una gobernanza que trascienda los ciclos políticos y los horizontes presupuestarios anuales. La evidencia comparada de países OCDE –como Reino Unido, Australia y Canadá– muestra que la existencia de planes nacionales de infraestructura de largo plazo, con carteras priorizadas bajo criterios técnicos y revisiones periódicas, contribuye a reducir la volatilidad de la inversión y a mejorar la calidad de los proyectos desde su fase de formulación.

Para Chile, este desafío implica fortalecer y articular los instrumentos de planificación nacional y regional, asegurando su coherencia con las estrategias de desarrollo productivo nacionales y regionales, transición energética, adaptación al cambio climático y ordenamiento territorial. Asimismo, requiere avanzar hacia mecanismos formales de priorización intersectorial y territorial que permitan asignar recursos en función de

impactos económicos, sociales y ambientales, a diferencia de la fragmentación institucional actual o de la coyuntura política. La consolidación de una cartera de proyectos con horizonte de 10 a 20 años es clave para reducir riesgos, atraer financiamiento privado y asegurar continuidad en la ejecución.

2. Permisos, certeza regulatoria y agilidad en la tramitación de proyectos

La complejidad y duración de los procesos de permisos y autorizaciones se ha convertido en una restricción crítica para la materialización oportuna de la inversión en infraestructura. La experiencia del BID y la OCDE muestra que los mayores costos no provienen únicamente de los estándares regulatorios, sino de la falta de coordinación entre organismos, la superposición de competencias y la ausencia de plazos predecibles⁷.

El desafío estratégico para Chile no es debilitar los resguardos ambientales, sociales o técnicos, sino avanzar hacia un sistema de permisos integrado, transparente y orientado a la gestión temprana de riesgos. Esto implica fortalecer la interoperabilidad de las plataformas públicas, establecer ventanillas únicas para la tramitación de permisos habilitantes de proyectos, clarificar criterios técnicos ex ante y promover instancias formales de coordinación entre servicios sectoriales. Una mayor certeza regulatoria permite reducir la prima de riesgo de los proyectos, mejorar las condiciones de financiamiento y acelerar la puesta en operación de infraestructura clave para el desarrollo productivo y social.

3. Integración temprana y gestión anticipada de riesgos sociales, territoriales y ambientales

La evidencia internacional muestra que una parte significativa de los retrasos y conflictos en proyectos de infraestructura se origina en la incorporación tardía de variables sociales, territoriales y ambientales en el ciclo de

6 OECD (2017). Getting Infrastructure Right: A Framework for Better Governance. Paris: OECD Publishing; BID (2016). Infraestructura sostenible para la competitividad y el crecimiento inclusivo. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo; Global Infrastructure Hub (2021). Infrastructure Monitor. Sydney: GIH.

7 OECD (2017). Getting Infrastructure Right: A Framework for Better Governance. Paris: OECD Publishing; OECD (2021). Regulatory Policy Outlook. Paris: OECD Publishing; BID (2020). De estructuras a servicios. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

inversión. La OCDE y el Banco Mundial destacan la integración temprana como una buena práctica para reducir riesgos regulatorios, fortalecer la legitimidad social de los proyectos y mejorar su diseño técnico⁸.

En el contexto chileno, este desafío se traduce en avanzar hacia modelos de planificación y formulación de proyectos que incorporen desde etapas iniciales la participación de comunidades, gobiernos locales y actores productivos, así como análisis territoriales y ambientales más integrados. La transparencia en la información, los mecanismos de diálogo estructurado y la anticipación de potenciales conflictos permiten reducir reprocesos, sobrecostos y judicialización, fortaleciendo la viabilidad de los proyectos en el largo plazo.

4. Fortalecimiento de la Asociación Público-Privada (APP) y nuevas fuentes de financiamiento

La magnitud de los requerimientos de inversión proyectados para la próxima década supera ampliamente las capacidades del financiamiento público tradicional. La experiencia internacional, recogida por el BID, la OCDE y el Global Infrastructure Hub, muestra que los países que logran sostener altos niveles de inversión en infraestructura combinan marcos sólidos de APP con el desarrollo de mercados de financiamiento de largo plazo⁹.

En el caso de Chile el desafío es doble. Por una parte, modernizar y diversificar los modelos de concesiones y contratos APP, incorporando esquemas más flexibles que permitan una mejor asignación de riesgos, incentivos por desempeño y mecanismos de ajuste frente a cambios regulatorios o tecnológicos. Por otra parte, ampliar la base de financiamiento mediante instrumentos como bonos verdes y sociales, fondos de infraestructura, participación de inversionistas institucionales y mecanismos de captura de va-

lor asociados al desarrollo territorial. Un entorno contractual claro, estable y alineado con estándares internacionales es clave para atraer capital de largo plazo y reducir el costo financiero de los proyectos.

Relacionado también a este punto, es fundamental que las carteras de proyectos incorporen una lógica de sostenibilidad empresarial, basada en la estimación temprana de su rentabilidad social y privada. Esto permitirá priorizar iniciativas que, junto con generar alto valor público, cuenten con condiciones atractivas para su financiamiento y ejecución por parte del sector privado, facilitando su materialización bajo esquemas de APP.

5. Gobernanza, capacidades del Estado y gestión de la ejecución

La brecha entre planificación y ejecución es uno de los principales cuellos de botella en los sistemas de inversión pública de la región. La experiencia del BID y la OCDE en América Latina muestra que muchas veces los proyectos enfrentan retrasos y sobrecostos no por fallas en su diseño conceptual, sino por debilidades en la gestión institucional, la coordinación intersectorial y la capacidad técnica de los organismos ejecutores¹⁰.

Para Chile, este desafío implica fortalecer la profesionalización de la gestión de proyectos públicos, desde la formulación y evaluación hasta la fiscalización y operación. Esto incluye mejorar los sistemas de información y seguimiento de la inversión, estandarizar metodologías de preparación de proyectos, fortalecer las unidades técnicas en los servicios públicos y promover instancias formales de coordinación entre ministerios, gobiernos regionales y entidades ejecutoras. Una gobernanza robusta permite no solo acelerar la ejecución, sino también mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

6. Productividad del sector: industrialización, estandarización e innovación tecnológica

El sector de la construcción enfrenta un escenario de mayores exigencias en términos de calidad, sostenibilidad, plazos y costos, en un contexto de presión por aumentar la inversión pública y privada. La experiencia de países como Suecia, Singapur y Corea del Sur muestra que los avances en productividad del sector han estado estrechamente ligados a la adopción de procesos industrializados, estandarización de diseños y digitalización del ciclo de vida de los proyectos.

Para Chile, este desafío implica promover un ecosistema de innovación que incentive la adopción de metodologías como BIM, gemelos digitales, construcción modular y soluciones constructivas estandarizadas, tanto en obra pública como privada. La estandarización de tipologías de proyectos –especialmente en infraestructura social y de servicios básicos– permitiría reducir tiempos de diseño, mejorar la calidad técnica y generar economías de escala que viabilicen la construcción industrializada. La productividad del sector no solo impacta en los costos de inversión, sino también en la velocidad con que la infraestructura habilita el desarrollo productivo y social.

7. Desarrollo de infraestructura resiliente al cambio climático

El cambio climático introduce riesgos crecientes sobre la infraestructura crítica, tanto en términos de eventos extremos como de cambios estructurales en las condiciones ambientales. La

OCDE y el BID han enfatizado la necesidad de transitar desde un enfoque reactivo, centrado en la reconstrucción, hacia un enfoque preventivo, basado en la incorporación de criterios de resiliencia y adaptación en todas las etapas del ciclo de inversión¹¹.

En Chile, este desafío es particularmente relevante en sectores como recursos hídricos, energía, conectividad vial, infraestructura portuaria y equipamiento social. Incorporar análisis de riesgo climático, estándares de diseño resiliente y mecanismos de financiamiento para adaptación permite proteger el valor de los activos públicos y privados, reducir costos fiscales futuros y asegurar continuidad en la provisión de servicios esenciales. La infraestructura resiliente es, en este sentido, un componente central de la sostenibilidad fiscal y territorial de largo plazo.

Enfrentar estos desafíos transversales no es solo una tarea técnica, sino una decisión estratégica de desarrollo país. La próxima década representa una ventana crítica para consolidar una infraestructura que habilite crecimiento económico, cohesión territorial y sostenibilidad ambiental, bajo reglas claras, capacidades institucionales robustas y una colaboración público-privada moderna y confiable. Avanzar en esta dirección permitirá transformar la cartera de proyectos identificada en este informe en un motor efectivo de competitividad, resiliencia y bienestar para las personas, posicionando a Chile en la senda de las economías que han hecho de la infraestructura un pilar permanente de su estrategia de desarrollo de largo plazo.

8 OECD (2017). Getting Infrastructure Right: A Framework for Better Governance. Paris: OECD Publishing; World Bank Group (2020). Public-Private Partnerships Reference Guide (Version 3). Washington, DC: World Bank; World Bank (2017). Environmental and Social Framework. Washington, DC: World Bank.

9 Inter-American Development Bank (2022). Public-Private Partnerships in Latin America and the Caribbean 2022. Washington, DC: IDB; OECD (2015). Infrastructure Financing Instruments and Incentives. Paris: OECD Publishing; Global Infrastructure Hub (2021). Infrastructure Monitor. Sydney: GIH.

10 OECD (2017). Getting Infrastructure Right: A Framework for Better Governance. Paris: OECD Publishing; Izquierdo, A., Pesino, C., & Vuletin, G. (Eds.). (2018). Better Spending for Better Lives. Washington, DC: IDB; BID (2020). De estructuras a servicios. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

11 OECD (2018). Climate-Resilient Infrastructure: Policy Perspectives. Paris: OECD Publishing; BID (2019). Infraestructura resiliente frente al cambio climático. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.

